LITORALPRESS

Fecha: 17-06-2025
Medio: La Segunda
Supl. : La Segunda
Tipo: Editorial
Título: EDITORIAL: Debate sobre nuevos institutos estatales

Pág. : 8
Cm2: 353,5

Tiraje: 11.692
Lectoría: 33.709
Favorabilidad: No Definida

Debate sobre nuevos institutos estatales

Una de las cláusulas de la conciliación firmada en enero de 2018 entre SQM y el Estado —proceso de arbitraje que modificó las condiciones de explotación de litio por parte de la minera no metálica en el Salar de Atacama—, estableció un aporte basal de SQM al desarrollo de la investigación en energía solar, minería baja en emisiones y desarrollo industrial del litio. Los recursos, de US$ 10 millones a US$ 19 millones, se canalizarían a través del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) dependiente de Corfo.

A más de siete años de la suscripción del documento, sin embargo, la entidad aún no ha logrado comenzar a operar, a pesar del interés manifestado por los gobiernos: en 2019, el Presidente Piñera anunció en Estados Unidos que el ITL sería el centro de estudios más grande de América Latina en energía solar, minería de bajas emisiones y litio; el actual mandatario, cuatro años después, destacó al ITL como una herramienta de investigación en minería sustentable, energía solar e hidrógeno verde.

Aunque Corfo adjudicó en 2021 el instituto a un grupo de universidades, la licitación fue anulada por la Corte Suprema en 2022 al acoger el recurso de otros 11 planteles que denunciaron errores e irregularidades. Después de un nuevo concurso, la constitución del ITL —en enero de 2024— se vio frenada por la Contraloría, que objetó el intento de Corfo de trasladar el pilar del litio a la esfera del Instituto Nacional de Litio y Salares (INLiSa). En medio de estas vicisitudes, incluso renunció la directora ejecutiva del organismo. Si no surgen más vallas, el 24 de junio el consorcio adjudicatario del ITL firmará los contratos con Corfo.

“Los hechos en torno al funcionamiento de los institutos de tecnologías limpias y del litio, grafican la complejidad que conlleva la gestión estatal en investigación y desarrollo y la necesidad de un manejo prudente de las expectativas”.

El INLiSa —pieza fundamental de la Estrategia Nacional del Litio que lanzó en 2023 el Presidente Boric tras abandonar la idea de una empresa estatal del litio contemplada en su programa— también ha comenzado en un entorno de cierta limitación. A pesar de la importancia que tiene para el Gobierno, el presupuesto de instalación asciende a $ 600 millones —su futuro financiamiento depende de los proyectos que presente ante Corfo— y solo en julio dispondrá de sus primeros cinco profesionales, que se sumarán al director ejecutivo, el académico Hernán Cáceres. A juicio del director, los recursos son una inversión “proporcional y responsable” en un contexto donde “estamos construyendo desde cero una institución de investigación de clase mundial en una industria estratégica”.

La demora en echar a andar el ITL y la relativa precariedad en torno al INLiSa son demostrativas de las dificultades que encara el Estado a la hora de materializar nuevas organizaciones desde el inicio, escollos atribuibles a trabas burocráticas, la regulación legal y administrativa y la propia inercia del aparato público; son también reflejo de la brecha que va del discurso de la autoridad a la realidad, en particular en materia de ciencia e innovación, y de los riesgos de dotar al Estado de metas demasiado ambiciosas en relación con sus capacidades. Hace algunas semanas, la prensa fue escenario de la controversia de distintos científicos con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), a propósito de las rendiciones de cuentas de los proyectos que financia Fondecyt, retrasos en las transferencias, incumplimiento de plazos y falta de comunicación; problemas prácticos que colisionan con el objetivo gubernamental de que el país tenga un rol en la investigación de punta.

En el contexto de la afirmación del candidato presidencial Gonzalo Winter, quien declaró que en su eventual mandato “el Estado impulsará que el sustituto del cobre y del litio sea descubierto en laboratorios chilenos por científicos chilenos”, el académico Pablo Aguayo Westwood, junto con subrayar el disminuido gasto nacional en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB, ha escrito que la promesa de Winter “desconoce la realidad crítica de la investigación científica en Chile”, en especial bajo el actual Gobierno. Los hechos en torno al funcionamiento de los institutos de tecnologías limpias y del litio, sumados a la tensión entre científicos y el Ministerio de Ciencia, grafican la complejidad que conlleva la gestión estatal en investigación y desarrollo y la necesidad de un manejo prudente de las expectativas.